

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL  
MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO  
Magistrada Ponente.

Apelación – Auto	
DEMANDANTE	ROSA ELENA GARCÍA DE RIVERA
DEMANDADO	AFP PROTECCIÓN S.A. y ARL POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.
RADICADO	05001-31-05-015-2017-00296-03
TEMAS	Graduación de las costas
DECISIÓN	Mantiene valor fijado

*Medellín, veinticinco (25) de noviembre de dos mil veintidós (2022)*

La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, conformada por los magistrados ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA, LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZÁBAL, y como ponente MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO, en acatamiento de lo previsto por el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, por medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020, y surtido el traslado correspondiente, procede a proferir decisión de segunda instancia dentro del presente proceso, promovido por la señora **ROSA ELENA GARCÍA DE RIVERA** contra la **AFP PROTECCIÓN S.A.** y la **ARL POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.**

La Magistrada Sustanciadora, MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO, declaró abierto el acto y a continuación, después de

deliberar sobre el asunto, de lo que se dejó constancia en el **ACTA No 052**, se procedió a decidirlo en los siguientes términos:

### **A N T E C E D E N T E S**

Es materia de la Litis, decidir el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la AFP PROTECCIÓN S.A., contra el auto proferido por el Juzgado Quince Laboral del Circuito de esta ciudad el día 11 de octubre de 2022, el cual impartió aprobación a la liquidación secretarial de costas procesales impuestas en la respectiva instancia.

Al respecto, debe recordarse que la señora ROSA ELENA GARCÍA DE RIVERA solicitó judicialmente el reconocimiento y pago de una pensión de sobrevivientes de origen profesional en calidad madre del afiliado fallecido MERLYN DE JESÚS RIVERA GARCÍA, en consecuencia, se CONDENE a la ARL POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., al reconocimiento y pago de esta prestación económica, en forma retroactiva a partir del 23 de febrero de 2016, junto con las mesadas adicionales, los intereses moratorios, la indexación de las condenas, el auxilio funerario, y las costas.

Y como PRETENSIONES SUBSIDIARIAS, en caso de no prosperar el origen laboral del fallecimiento, se ordene, el pago de la pensión de sobrevivientes deprecada a cargo de la AFP PROTECCIÓN S.A., en forma retroactiva a partir del 23 de febrero de 2016, o en su defecto la devolución de saldos, junto con las mesadas adicionales, los intereses moratorios, la indexación de las condenas, el auxilio funerario, y las costas procesales.

En sentencia del 11 de agosto de 2020, el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medellín, DECLARÓ que el fallecimiento del señor MERLYN DE JESÚS RIVERA GARCÍA, no obedeció a un

accidente por causa o con ocasión del trabajo ni durante la ejecución de órdenes del empleador, por lo que la pensión de sobrevivientes deprecada no está a cargo de la administradora de riesgos laborales POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., a quien ABSOLVIÓ a de todas y cada una de las pretensiones formuladas.

De otro lado, DECLARÓ que la señora ROSA ELENA GARCÍA DE RIVERA, no cumple con los requisitos para ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes solicitada con ocasión del fallecimiento de su hijo MERLYN DE JESÚS RIVERA GARCÍA, ABSOLVIENDO a la AFP PROTECCIÓN S.A., de la pensión de sobrevivientes de origen común deprecada, corriendo igual suerte las demás pretensiones referentes al pago de retroactivo pensional, mesadas adicionales, intereses moratorios e indexación, y el auxilio funerario deprecado.

CONDENÓ a la AFP PROTECCION S.A., a pagar a la señora ROSA ELENA GARCÍA DE RIVERA dentro del término de treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de ejecutoria de la sentencia, la devolución de saldos de la cuenta de ahorro individual del afiliado fallecido MERLYN DE JESÚS RIVERA GARCÍA, teniendo en cuenta el valor y rentabilidad que sean aplicables al momento en que se efectúe el pago, y finalmente impuso las costas del proceso en primera instancia a cargo de la demandante y a favor de las demandadas.

La sentencia de primera instancia fue conocida por este Tribunal de Distrito Judicial en apelación presentada por los apoderados judiciales de la parte demandante y la codemandada PROTECCIÓN S.A., habiéndose proferido sentencia de segunda instancia el día 21 de enero de 2022, mediante la cual se REVOCÓ la sentencia de primer grado, en cuanto absolvió de la pensión de sobrevivientes de origen laboral deprecada, para en su lugar, DECLARAR que el fallecimiento del señor MERLYN DE JESÚS

RIVERA GARCÍA fue de origen laboral, y que al encontrarse válidamente afiliado al sistema de riesgos laborales a través de la ARL POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., dejó causado el derecho pensional a favor de su madre ROSA ELENA GARCÍA DE RIVERA quien acreditó el requisito legal de dependencia económica.

En consecuencia se CONDENÓ a la ARL POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., a reconocer y pagar a la demandante ROSA ELENA GARCÍA DE RIVERA, una pensión de sobrevivientes de origen laboral, cuyo retroactivo pensional causado entre el 23 de febrero de 2016 y el 31 de diciembre de 2021, asciende a la suma de \$61.497.504, también se dispuso la indexación de las condenas a partir 23 de febrero de 2016, y hasta el momento en que se efectuó el pago total de la obligación, y se autorizó la deducción del aporte obligatorio en salud.

A partir del 1° de enero de 2022 se ordenó a la ARL POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. a continuar pagando a la demandante, una pensión de sobrevivientes de origen laboral en cuantía mínima, sobre 13 mesadas anuales, sin perjuicio de los incrementos de decreto el gobierno nacional.

Se REVOCÓ la sentencia objeto de apelación de fecha y procedencia conocida, en cuanto absolvió de la pretensión relativa al auxilio funerario, para en su lugar, CONDENAR a la ARL POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., a reconocer y pagar a la señora ROSA ELENA GARCÍA DE RIVERA por concepto de AUXILIO FUNERARIO la suma de \$4.450.000.

Finalmente se CONFIRMÓ en lo demás la sentencia, y se impusieron las COSTAS en ambas instancias a cargo de las codemandadas y favor de la demandante, en segunda instancia se

fijaron como agencias en derecho la suma equivalente a 1 SMLMV para el año 2022.

La sentencia de segunda instancia, fue objeto del recurso extraordinario de casación por parte del apoderado judicial de la ARL POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., sin embargo, y encontrándose el expediente en la H. Corte Suprema de Justicia la misma parte presentó desistimiento al recurso, el cual le fue aceptado mediante auto del 22 de junio de 2022, abatiéndose la Corte de imponer condena en costas procesales.

### **DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA OBJETO DE ALZADA**

Una vez surtidos los recursos de apelación y aceptado el desistimiento al recurso de Casación, fue devuelto el expediente al juzgado de origen, la *A Quo* mediante auto del 11 de octubre de 2022, ordenó que a través de trámite secretarial se liquidaran las costas procesales, por las siguientes sumas:

- AGENCIAS EN DERECHO en 1ª Instancia a cargo de la AFP PROTECCIÓN S.A. y la ARL POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., y a favor de la señora ROSA ELENA GARCÍA DE RIVERA la suma de **\$3.297.375.**
- AGENCIAS EN DERECHO en 2ª Instancia a cargo de la AFP PROTECCIÓN S.A. y la ARL POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., y a favor de la señora ROSA ELENA GARCÍA DE RIVERA la suma de **\$1.000.000.**

**TOTAL a pagar costas y agencias en derecho: \$4.297.375.**

En providencia de la misma fecha, se le impartió aprobación a dicha liquidación por parte del *A Quo*.

El apoderado judicial de la codemandada AFP PROTECCIÓN S.A., recurrió en reposición y en subsidio apelación el valor liquidado por concepto de costas procesales.

La juez de primera instancia, mediante auto del 18 de octubre de 2022 (archivo PDF N° 15), desató la reposición, no accediendo a la misma, argumentando que la liquidación efectuada es coherente y proporcional, pues atiende los criterios y tarifas establecidas en el Acuerdo PSAA16-10554 de 2016, máxime que el artículo 228 de nuestra Constitución, estableció el principio de la autonomía y la imparcialidad de la justicia. Y autonomía significa que en todos los casos y en este en particular, es del fuero del fallador decidir de conformidad con su criterio jurídico, pero siempre dentro del marco legislativo, como en efecto ocurrió, puesto que, en ninguna parte de la legislación, jurisprudencia y doctrina, se obliga a que se deba imponer el máximo o el mínimo con respecto a las agencias en derecho.

A través de esa misma providencia, concedió el recurso de apelación ante esta Corporación, en el efecto suspensivo.

## **FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN**

Sustentó su inconformismo con la tasación de costas procesales, argumentando que en el presente asunto las agencias en derecho en primera instancia debieron fijarse en una suma inferior, pues considera que el valor liquidado por la *A Quo* no se compadece con la obligación de hacer ordenada a Protección, ello es, realizar entrega de saldos de cuenta de ahorro individual del afiliado fallecido.

## **Alegatos de conclusión**

Los apoderados judiciales de las partes, se abstuvieron de presentar alegatos de conclusión en esta instancia.

## **CONSIDERACIONES DE LA SALA**

Conforme a lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 365 del Código General del Proceso, las costas de un proceso corren a cargo de *“...la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto...”*.

Dicha disposición consagra un criterio objetivo que busca que las costas del proceso sean cubiertas por quien pierde el litigio, sin hacer distinción sobre la persona que debe correr con la obligación una vez se decida la litis.

Las costas del proceso comprenden, de un lado, los gastos judiciales que haya hecho la parte beneficiada con la condena y que aparezcan comprobados en el expediente y del otro, las agencias en derecho, en las que, para su fijación por el juez *“deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o éste y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas...”* (Artículo 366, numeral 4º del CGP).

De otro lado, el Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016, emanado de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, establece en su artículo 2º los criterios a tener en cuenta para la fijación de tales emolumentos:

**“ARTÍCULO 2°. Criterios.** Para la fijación de agencias en derecho el funcionario judicial tendrá en cuenta, dentro del rango de las tarifas mínimas y máximas establecidas por este acuerdo, la naturaleza, la calidad y la duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y demás circunstancias especiales directamente relacionadas con dicha actividad, que permitan valorar la labor jurídica desarrollada, sin que en ningún caso se puedan desconocer los referidos límites.

**PARÁGRAFO.** Cuando el asunto objeto del proceso esté relacionado con la violencia de género y dentro de él se hayan acreditado las circunstancias constitutivas de la misma, el funcionario judicial al fijar agencias en derecho deberá realizar una valoración favorable de cargas y costos para las mujeres víctimas de aquella.”

Seguidamente, en lo que atañe a la tasación de las agencias en aquellos en los PROCESOS DECLARATIVOS EN GENERAL, el mencionado acuerdo prescribe:

**“ARTÍCULO 5°. Tarifas.** Las tarifas de agencias en derecho son:

**1. PROCESOS DECLARATIVOS EN GENERAL.**

**En única instancia.**

a. Cuando en la demanda se formulen pretensiones de contenido pecuniario, entre el 5% y el 15% de lo pedido.

b. En aquellos asuntos que carezcan de cuantía o de pretensiones pecuniarias, entre 1 y 8 S.M.M.L.V.

**En primera instancia.**

a. Por la cuantía. Cuando en la demanda se formulen pretensiones de contenido pecuniario:

(i) De menor cuantía, entre el 4% y el 10% de lo pedido.

(ii) De mayor cuantía, entre el 3% y el 7.5% de lo pedido.

**b. Por la naturaleza del asunto. En aquellos asuntos que carezcan de cuantía o de pretensiones pecuniarias, entre 1 y 10 S.M.M.L.V.**

**En segunda instancia.** Entre 1 y 6 S.M.M.L.V.”



## **CASO CONCRETO**

### **Vigencia de las normas reguladoras de la tasación de agencias en derecho en el Sub lite:**

En el presente caso resulta aplicable la regulación establecida en el Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto 2016 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, teniendo en cuenta que nos encontramos frente a una demanda presentada el 5 de abril de 2017 (fls. 25 del archivo pdf 01).

También destaca la Sala que, al tratarse de un proceso ordinario laboral declarativo de doble instancia, y resultar la resolución de las instancias desfavorable para los intereses de las codemandadas PROTECCIÓN S.A., y ARL POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., el numeral 1° del artículo 5° del Acuerdo PSAA16-10554 de 2016, establece con absoluta claridad que las agencias en derecho en primera instancia tratándose de pretensiones con contenido pecuniario, podrán ser tasadas por el administrador de justicia en asuntos de mayor cuantía, en una suma que puede oscilar entre el 3% y el 7.5% de lo pedido.

Y si bien es cierto, el valor fijado por concepto de agencias en derecho en primera instancia (\$3.297.375) corresponde a un 5% del valor de las condenas por concepto de retroactivo pensional (\$61.497.504) y auxilio funerario (\$4.450.000), y que dicho porcentaje se encuentra dentro de los límites dispuestos por el referido acuerdo, no podía perderse de vista que dichas condenas fueron para la codemandada ARL POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., a quien se le impuso el pago de la pensión de sobrevivientes de origen profesional y el auxilio funerario.

Por lo tanto, considera la Sala que le asiste razón al apoderado judicial de la AFP PROTECCIÓN S.A., en su recurso de alzada, pues el valor de las estas condenas por concepto de retroactivo pensional y auxilio funerario, no podía ser el punto de partida para liquidar las agencias en derecho que le correspondían a la AFP codemandada, pues la única condena que esta debía asumir era la de efectuar la devolución de saldos a favor de la señora ROSA ELENA GARCÍA DE RIVERA, es decir, la pretensión que luego se convirtió en condena, no tenía un contenido pecuniario, y por ello las agencias en derecho debían fijarse en salarios mínimos legales mensuales vigentes, para el año 2020, en que se profirió la sentencia de primera instancia, atendiendo a la naturaleza del asunto.

No obstante, al fijarse estas agencias en derecho atendiendo a la naturaleza del asunto, el funcionario judicial tenía un margen de discrecionalidad de entre 1 y 10 SMMLV, para el año 2020 (\$877.803), estimando la Sala que una liquidación acorde a los criterios establecidos en el art. 2° del Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto 2016, sería de 2 SMLMV para el año 2020 ( $\$877.803 \times 2 = \textbf{\$1.755.606}$ ).

Pero al resultar esta suma superior a la mitad (1/2) de las agencias en derecho liquidas por la primera instancia, ( $\$3.297.375/2 = \textbf{\$1.648.687}$ ), y dada la condición de apelante único que detenta la AFP PROTECCIÓN S.A., no hay lugar a modificar en peor esta condena, en atención al principio de la no “*reformatio in pejus*”, entendido como una garantía de rango constitucional que se encuentra dentro del núcleo esencial del debido proceso y especialmente del derecho de defensa, máxime si se tiene en cuenta que la parte demandante tampoco controvertió la liquidación de las agencias en derecho en primera instancia, en el

sentido de solicitar una liquidación independiente a cargo de la AFP PROTECCIÓN S.A., y manteniendo la liquidación realizada por la a quo a cargo de la ARL POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

Así las cosas, debe concluirse que si bien se utilizó indebidamente la misma fórmula para liquidar las agencias en derecho en primera instancia a cargo de cada una de las codemandadas, en la practica la mitad de esa condena resulto inferior a la condena que en realidad le correspondía a la AFP PROTECCIÓN S.A., no habiendo así lugar a rebaja solicitada, y tampoco a un aumento general en la fijación de las agencias en derecho de primera instancia, lo anterior, en aplicación del principio de la no reforma en peor, y la falta de legitimación en la causa para adicionar la liquidación independiente que le correspondía a la AFP accionada.

Sin necesidad de mayores apreciaciones sobre el caso, se CONFIRMARÁ en todas sus partes la providencia que se revisa en apelación de fecha y origen conocidos por las razones aquí expuestas.

**Sin COSTAS** en esta instancia.

## **D E C I S I Ó N**

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL,**

## **R E S U E L V E:**

**Primero. CONFIRMAR** la providencia objeto de apelación, de origen y fecha conocidos, por las razones aquí expuestas.

**Segundo. Sin Costas** en esta instancia.

Se ordena notificar por **ESTADOS** lo resuelto, y devolver el expediente al juzgado de origen.

**Los magistrados**

  
**MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO**  
Magistrada

  
**ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**  
Magistrado

  
**LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL**  
Magistrada

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE  
MEDELLÍN – SALA LABORAL - HACE CONSTAR

Que la presente providencia se notificó por estados N °  
214 del 28 de Noviembre de 2022.

Consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/130>.